

Condiciones de vida frente al aislamiento en Mendoza

Autores

CORTESE, Carmelo, FCPyS UNCUYO, carmelocortese@yahoo.com.ar

SALATINO, Noelia, CONICET-INTA EEA La Consulta, noeliasalatino@gmail.com

BAUZÁ, Javier, FCPyS UNCUYO armenia_hl@yahoo.com.ar

Palabras claves

Aislamiento- Mendoza- Condiciones de Vida

Introducción

En este artículo presentamos los resultados principales de un relevamiento realizado en la Provincia de Mendoza ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El mismo fue planificado en torno a dos objetivos principales: a) obtener un diagnóstico de las principales problemáticas y del impacto del aislamiento social obligatorio en la población mendocina, atendiendo a la diversidad social y territorial; b) aportar a las estrategias de acción colectivas para enfrentar la pandemia, recogiendo iniciativas y experiencias realizadas en diversos ámbitos del territorio provincial¹.

El brote del COVID-19 genera un panorama de incertidumbre a nivel mundial; en los ámbitos científicos, académicos y políticos surgen distintos debates en torno a los orígenes, las medidas tomadas y las consecuencias de la pandemia sobre la economía, el empleo, la salud, la educación, entre otras esferas. El nivel de propagación de este virus y las limitaciones de los sistemas sanitarios para responder ante una gran cantidad de contagiados determinan que el aislamiento social ("cuarentena") sea una de las medidas principales tomadas por los gobiernos nacionales. En Argentina, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) se inició el 19 de marzo por DNU 297-2020.

Los medios de comunicación afirman que este virus no reconoce clases sociales, género ni etnias, ya que todos nos podemos contagiar. Si bien es verdad que cualquier persona puede contagiarse de esta enfermedad respiratoria, las condiciones materiales de existencia van a determinar el abanico de estrategias

¹ El informe fue realizado en el marco del equipo de investigación "Mendoza: territorio, población, estructura y conflicto" de la FCPyS / SIIP-UNCuyo. Director Cortese, C. y Co-Director Bauza, J. Integrantes: Abdala, F; Bertolotti, F; Carabaca, C; Guillén, N; Jara, J; Ortubia, E; Pereyra, M; Raía, L; Rojo, R; Salatino, N; Tapia, M.

con las que las personas, familias y sectores sociales afrontan o previenen el contagio. Esa "igualdad" ante el contagio no hace más que poner en el tapete las profundas desigualdades que atraviesan a la sociedad argentina en general, y a la mendocina en particular.

¿Cómo encuentra a Mendoza el brote del COVID-19? Revisemos algunos datos de pobreza y mercado de trabajo. Según el INDEC, en el segundo semestre del 2019 la pobreza alcanzaba al 28,9% (93.258) de los hogares y al 38,6% (393.283) de las personas del conglomerado urbano Gran Mendoza. Dentro de este grupo había 80.272 personas (7,9% del total) bajo la línea de indigencia² (Encuesta Permanente de Hogares -EPH-).

Estos indicadores son aún más alarmantes si consideramos la información aportada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas -DEIE- en base a la Encuesta de Condiciones de Vida -ECV-³, la cual incluye información de todos los departamentos de la provincia. Según este relevamiento, en octubre del 2019, el 29,7% (125.275) de los hogares y al 42,1% (599.672) de las personas que viven en las zonas urbanas de Mendoza se encuentran bajo la línea de la pobreza. De estas personas 91.162 (6,4%) están bajo la línea de la indigencia (DEIE, 2020).

En pocas palabras, en Mendoza 42 de cada 100 personas no tienen ingresos suficientes para satisfacer consumos básicos (alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud). Además, en el informe de la ECV del 2018 la DEIE señalaba que el 38% de las personas pobres y el 48% de las indigentes en Mendoza son niños y niñas entre 0 y 14 años (DEIE, 2019).

En relación con el mercado de trabajo, la precariedad laboral permanece como rasgo principal en la provincia, con una importante proporción de trabajo no registrado. En el 2018 el 49% de los ocupados no estaban registrados en Mendoza, dato que aumenta a un 60% en las zonas rurales. Entre los trabajadores independientes, más del 70% se encuentra dentro de la informalidad sin la realización de aportes jubilatorios. Para el caso de los trabajadores asalariados, los no registrados representan el 38% (DEIE, 2019). Como hemos señalado en trabajos anteriores (Cortese, C.; et al.,2016), la precariedad en el trabajo asume diferen-

² Las nociones de pobreza e indigencia empleadas por el INDEC para el cálculo de incidencia se corresponden con el método de medición indirecta, denominado también "línea". El concepto de "Línea de Indigencia" (LI) procura establecer si los hogares/personas cuentan con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas, denominada Canasta Básica Alimentaria (CBA). De esta manera, los hogares/personas que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes. Los componentes de la CBA se valorizan con los precios relevados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cada período de medición. Asimismo, la "Línea de Pobreza" (LP) extiende el umbral para incluir no sólo los consumos alimentarios mínimos sino también otros consumos básicos no alimentarios. La suma de ambos conforma la Canasta Básica Total (CBT), la cual es también contrastada con los ingresos de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) (INDEC,2016).

³ De forma similar al cálculo realizado por la EPH, en la ECV la valorización de la CBA y de la CBT se compara con los ingresos de los hogares relevados por la ECV.

tes formas: subempleo demandante, trabajo asalariado no registrado, trabajo registrado pero precario, trabajo asalariado disimulado como autónomo, cuentapropismo informal, tercerización y diversas formas de flexibilización laboral, que afectan a una importante franja de los ocupados mendocinos.

En los años de gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional y Alfredo Cornejo como gobernador (2015-2019) la problemática de la desocupación se agudiza. Según datos de la EPH entre el primer trimestre del 2015 y el primer trimestre del 2019, la desocupación aumentó del 3,5 al 8,4 en los conglomerados urbanos del Gran Mendoza, afectando a algo más de 40.000 personas. Entre los motivos de la pérdida del trabajo destacan: por despido o cierre (22,7% de los desocupados) y por fin de trabajo temporario (31,9%).

Frente a este panorama nos preguntamos, si los ingresos ya eran insuficientes para satisfacer el consumo alimentario básico, ¿cómo estos hogares y personas enfrentan el aislamiento? Si la mayoría son niños/as ¿cómo se sostiene la educación a distancia? Si gran parte de los ocupados no están registrados, otros se desempeñan en trabajos precarios y otros se quedaron desocupados ¿cómo hacen para cumplir con la consigna "quédate en casa"?

El relevamiento y los resultados obtenidos

Tomando como punto de partida la mencionada desigualdad económica, social y territorial, buscamos dar cuenta de cómo los y las mendocinos/as hacen frente al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Para ello, pasados los primeros quince días del aislamiento, realizamos un relevamiento a referentes comunitarios, políticos y sindicales de diferentes zonas de la provincia de Mendoza. No buscamos representatividad en términos estadísticos, sino más bien rescatar la mirada sobre la temática de personas que están trabajando activamente en sus comunidades o que tienen un vínculo especial, ya sea, por su pertenencia sindical, política o por su ejercicio académico o de investigación. Se les solicitó que hicieran un esfuerzo por expresar -más allá de lo que ellos/as sienten o piensan- lo que perciben en sus compañeros/as, vecinos o comunidad.

Preparamos una entrevista con preguntas organizadas en torno a distintos disparadores que fue enviada a los referentes seleccionados la primera semana de abril. Recibimos 34 respuestas, de varones y mujeres entre los 27 y 63 años. Recibimos repuestas de los departamentos Malargüe, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, La Paz, Rivadavia, San Martín, Maipú, Luján, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Capital; tanto de áreas urbanas como rurales.

Entre las características sociales de los barrios y zonas que relevamos se encuentran: Barrios urbanos de estratos medios, con buena calidad de vivienda y acceso a servicios; Barrios populares con mala calidad constructiva de las viviendas, acceso diferenciado a servicios y hacinamiento; zonas rurales donde se encuentran conglomerados de casas y comercios; zonas rurales con viviendas dispersas y personas vinculadas a actividades agropecuarias.

Los/as entrevistados/as nos hablaron sobre la situación de: trabajadores/as de la educación (de nivel primario, secundario y universitarios) y otros trabajadores/as estatales; pequeños productores de la agricultura familiar, contratistas y tanteros, obreros rurales; autónomos, desocupados y precarizados (albañiles, vendedores ambulantes, changarines, servicio doméstico, entre otros); migrantes; jubilados/as y pensionados/a; ocupados dependientes e independientes; y estudiantes universitarios.

A continuación, presentamos los resultados principales.

a. Circulación de la información y el mensaje "quédate en casa"

Los y las entrevistados/as señalan que existe una gran cantidad de información que circula a través de los medios masivos (noticieros) y redes sociales. En algunos casos se convierte en una saturación de información que despierta sentimientos de miedo y paranoia. A esto se suma la altísima circulación de información falsa, que en una gran cantidad de casos es tomada por verdadera, generando gran confusión y empeorando la sensación de miedo.

Los/as referentes destacan la necesidad de concientizar a la población sobre los canales más seguros para informarse y las diferentes maneras en que pueden/deben chequear la información. En este sentido, han destacado el importantísimo papel jugado por las radios locales a la hora de brindar información confiable (Malargüe, Gral. Alvear; La Paz, Tunuyán).

La mayoría de las personas considera *necesaria o atinada la prohibición* de salir de casa y conocen las excepciones a la norma. Sin embargo, se mencionan diferentes condiciones de posibilidad para sostener el "quédate en casa", tanto de los que están autorizados a circular, como de aquellos a quienes no les queda otra que salir "ilegalmente" para subsistir.

El grado de aceptación de la medida es variable, mientras algunos sectores medios plantean la necesidad de aumentar los controles; otros que es difícil y utópica de sostener a largo plazo y señalan la "hipocresía que se controle al simple y no al millonario". En menor medida se considera al "quédate en casa" como una medida exagerada y poco aceptable, incluso que la enfermedad "es de ancianos y ricachones".

b. Cumplimiento de la cuarentena: causas predominantes para "quedarse" y para "salir" por parte de las personas del barrio/comunidad.

Aunque parece predominar el cumplimiento de la cuarentena, esta se relativiza en función de las zonas y sectores. El *cumplimiento está asegurado* para quienes siguen cobrando: salarios (estatales), jubilaciones y los que perciben Asignación Universal por Hijo o algún tipo de plan/subsidio. También en algunos casos por el uso de los ahorros disponibles. Uno de los entrevistados remarca que las personas que pueden cumplir con el aislamiento, en su gran mayoría, son quienes tienen viviendas adecuadas a la cantidad de personas que las ocupan y tiene recursos (alimentos, vestimenta, tecnológicos) que les permiten llevar adelante el encierro.

En los primeros días de aislamiento obligatorio, según los/as referentes, *los que salieron de casa* pertenecían a algún grupo o sector obligado a trabajar, entre los que se encuentran los rubros de alimentación, seguridad y salud. Los entrevistados de zonas rurales (Maipú, San Martín, General Alvear, Tunuyán) mencionan también a los trabajadores agrícolas y los trabajadores de bodegas, ya que la cosecha “no puede esperar”. El gobernador Suarez solicitó al gobierno nacional exceptuar la actividad de la cosecha de la cuarentena obligatoria; aprobada esta excepción se difundió un protocolo de acción para evitar la propagación del COVID-19 en fincas, establecimientos industriales, galpones de empaque y bodegas.

Sin embargo, además de estos rubros habilitados hay otras personas que no pueden cumplir con el aislamiento: todos aquellos que “viven al día”. Con el correr de los días, este grupo ha ido volviéndose más numeroso. Como señalan los referentes, no se trata de personas que salen a pasear o que no están de acuerdo, sino que no cuentan con las condiciones materiales y de ingreso para sostener el aislamiento. En los barrios donde habitan trabajadores independientes, informales, precarios y/o vinculados a la economía popular, el quedarse en casa es mucho más difícil. En los sectores más vulnerables no se trata solo de la necesidad de “salir a buscar el mango”, sino de tolerar el aislamiento en el hacinamiento, con malas condiciones de vivienda, y dificultad de aprovisionamiento.

Otro grupo que rompe con el aislamiento son las personas que realizan acciones solidarias. Los/as referentes de organizaciones barriales comentan la necesidad de salir para ayudar a quienes la “están pasando mal”, sostener los comedores y merenderos, recolectar alimentos y llevarlos a las familias, entre otras cuestiones.

c. Extensión de la cuarentena

Las miradas de los referentes en torno a las posibilidades de la población para mantener el aislamiento en caso de que se prolongara – cuestión que sucedióse encuentran directamente relacionadas a las cuestiones que mencionábamos arriba. Hay una parte de la población que puede sostener el ASPO porque tienen ingresos asegurados; para otros es prácticamente imposible. Muchos no tienen ahorros y el trabajo diario o las changas son su única fuente de ingresos. Los subsidios y AUH son necesarios, pero insuficientes. Para aquellos que tienen trabajo en el sector privado, como el comercio o los servicios, aparece el temor a recibir parcialmente o tarde los salarios o, incluso, quedar desocupados si el aislamiento continuaba.

Se hace hincapié en la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad en relación a la cobertura de las necesidades básicas de la población. Debido a la fecha en la que fue realizado el relevamiento, no se ha logrado registrar el impacto de varias de las medidas tomadas por el gobierno nacional en este sentido, tales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores/as informales, trabajadores/ras de casas particulares y monotributistas sociales y de las categorías más bajas, y los refuerzos depositados para la tarjeta alimentaria. Estas medidas han colaborado para sostener el aislamiento ante la emergencia sanitaria, sin embargo, en caso de seguir extendiéndose la cuarentena, será necesario aumentar y extender este tipo de medidas.

Los referentes de los sindicatos docentes señalan las dificultades que atraviesan, por un lado, los docentes suplentes que no pueden trabajar y, por otro lado, los celadores, quienes históricamente han cobrado bajos salarios y complementan sus ingresos con changas. Paradójicamente son estos celadores los que están armando los “bolsones” de comida que entrega la Dirección General de Escuelas para cubrir a los niños, niñas y adolescentes perjudicados por el cierre de los comedores escolares.

d. Condiciones generales de las viviendas, servicios y conectividad

En relación con las condiciones de vivienda y el acceso a servicios básicos, las entrevistas corroboran una importante desigualdad en la población, la cual es una expresión más de la desigualdad social existente y se encuentra enmarcada por una profunda fragmentación territorial.

Las viviendas son de material resistente en sus techos, pisos y paredes, aunque pueden presentar problemas de aislamiento, cuestión que es problemática en la estación más fría del año. En los barrios populares un problema recurrente es el hacinamiento. Las viviendas cuentan con acceso a servicios básicos como electricidad y agua, pero la calidad de estos varía según los departamentos, áreas y barrios: aparecen problemas de cortes de agua, falta de acceso a gas natural y cloacas. Incluso en algunas zonas rurales las familias no cuentan con agua potable dentro de la vivienda. En otros lugares, como Malargüe, se presentan problemas para calefaccionar las viviendas.

La conectividad es otra de las dificultades que señalan los/as entrevistados/as. El acceso a internet para que los niños, niñas y adolescentes puedan realizar las actividades es muy diferente entre los departamentos y las zonas. En muchos hogares no se cuenta con los espacios y comodidades adecuadas, no se dispone de computadora y deben conectarse desde los celulares. Este problema -que comenzaba recién a visualizar cuando hicimos las entrevistas- es una de las preocupaciones más importantes que enfrentan los hogares ¿Cómo acompañar y sostener los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes en contexto de aislamiento? Los sectores más vulnerados no sólo están afectados por la pobreza y las malas condiciones habitacionales, sino también por la escasez de recursos para continuar con la educación a distancia en este contexto de emergencia sanitaria.

e. Cercanía a hospitales y centros de salud

La mayoría refiere la existencia de hospitales, centros de salud o postas sanitarias en sus zonas. Pero no hay seguridad en cuanto a la capacidad para atender en esta crisis sanitaria. Nuevamente, la fragmentación territorial y el acceso desigual a servicios según zonas determinan las respuestas de los/as referentes. Las cuestiones señaladas se encuentran vinculadas a problemáticas estructurales del sistema de salud en Mendoza: déficit de atención de especialistas en todos los departamentos, demoras en los servicios de urgencias y traslados, dificultad para obtener turnos, y escasez de insumos y recursos sanitarios.

Para los barrios periféricos y en algunas zonas rurales el acceso a la salud pública es ineficiente, cuestión que se ve agravada por las condiciones de pobreza e informalidad en el trabajo. Otra problemática que surgió en las entrevistas fue la de las personas con discapacidad y sus familias, debido a la suspensión de muchos de los tratamientos y terapias por la emergencia sanitaria.

f. Estado de ánimo predominante y convivencia ante el ASPO

Les consultamos a los/as referentes sobre el estado de ánimo general que percibían entre sus vecinos/as y comunidad. Pasados los primeros días del aislamiento el estado de ánimo que predomina es el de la preocupación y la angustia, sobre todo vinculado a la enfermedad y la posibilidad de contagio. También señalan la resignación por el encierro y, en menor medida, incertidumbre, bronca, miedo, optimismo, ansiedad y tristeza.

Además, les preguntamos si notaban la emergencia de problemas de convivencia en los hogares y familias. Los/as entrevistados/as mencionaron problemas de género, maltrato infantil y consumo problemático de alcohol y estupefacientes. Estos problemas no son nuevos, pero se ven exacerbados en el contexto de aislamiento.

Se detecta también que surgen o se agudizan problemas de intolerancia entre vecinos/as de un mismo barrio. Los/as entrevistadas/os señalan que las personas están más susceptibles de lo normal, cuestión que, en ciertas ocasiones, genera una fragmentación de los lazos construidos en el barrio. Esto se expresa, por ejemplo, en el abandono por parte de algunos/as vecinos/as de los grupos de WhatsApp armados para circular información importante para la comunidad.

Un caso especial es el de docentes, que además son madres con hijos/as en edad escolar. Muchas de ellas, a causa de un desigual reparto de las tareas de cuidado, deben, simultáneamente, cumplir con obligaciones laborales (de forma virtual), realizar las actividades domésticas y las tareas escolares de sus hijos/as. Este cuadro se complica aún más cuando los medios tecnológicos y las comodidades con las que se cuenta son insuficientes (computadoras, teléfonos, conectividad, espacio de trabajo dentro del hogar).

g. Accionar policial

En este ítem no se observa una tendencia marcada, dividiéndose las opiniones entre las que señalan abusos de las fuerzas policiales (castigo a los sectores empobrecidos), y las que consideran que cumplen una función de asistencia/control necesario. Las diferentes opiniones se vinculan a la zona y barrios donde viven estos referentes. Los que viven en los barrios más vulnerables tienen una mirada crítica del accionar policial en las calles: discriminación, cuadrillas de changarines o pequeños productores que son detenidos por no tener autorización para circular. En otros barrios aparece otro vínculo, la policía no va o si lo hace es para controlar que todo esté bien. Para otros, la policía no debería limitarse a la vigilancia, y podrían ayudar a la gente más vulnerable, por ejemplo, realizando las compras de los jubilados.

h. Problemas específicos

Estos son, según los/las entrevistadas los problemas que han emergido o se han agravado a causa del ASPO:

- Cierre de comedores escolares, lo que aumenta la demanda en los merenderos y comedores barriales, llegando en algunos casos a triplicarse el pedido de raciones.
- En algunos barrios y zonas aparece la discriminación a los sectores migrantes.
- Dificultad / colapso de la salud en general y las obras sociales en particular.
- Falta de insumos para realizar una adecuada prevención: guantes, alcohol en gel, alcohol y ahora de lavandina.
- Aumento de precios y desabastecimiento, cuestión que se agrava en muchos casos por la baja o la falta de ingresos.
- Inseguridad, robos al voleo, problemas también vinculados al consumo problemático.
- Precariedad laboral: despidos, no pago/reducciones de salarios, imposibilidad de realizar changas (en muchos casos única fuente de ingresos).
- Dificultades de los pequeños productores y de la agricultura familiar para obtener los permisos para circular.
- Suspensión de las terapias para personas con discapacidad.
- En relación con los servicios: falta de agua y colapso de cloacas en algunos barrios populares.
- La falta de agua dentro de la vivienda que afecta a muchos pobladores rurales dificulta aún más realizar las actividades de limpieza y cuidado recomendadas.
- Dificultades en las familias para acompañar con las tareas escolares (pedagógicas, de disponibilidad de tiempo, tecnológicas, materiales).

i. Reclamos a las autoridades

Sobresale la propuesta de conformar un *gran comité provincial de crisis*, con participación popular, de las organizaciones sociales y de los sindicatos para que aporten la mirada de los sectores más vulnerables y desde la clase trabajadora, velando por su protección y las fuentes de trabajo. Esta organización o comité de emergencia/crisis se plantea también a nivel municipal, porque hay problemas que deben resolverse a ese nivel.

Entre los reclamos "inmediatos" se encuentran: 1) Más presupuesto para la emergencia sanitaria; 2) Coordinación de los municipios con cámaras y organizaciones; 2) Organizar grupos de voluntarios a nivel municipal, para realizar tareas de asistencia social; 3) Controlar las fuerzas policiales; 4) Garantizar el agua en todos los barrios (para que se cumpla el protocolo de salud) y en las zonas rurales, tanto para consumo humano como para las actividades agrícolas; 5) Promover ollas populares y entregar bolsones alimentarios, que incluyan tanto carne, lácteos, verdura y frutas, como Kits sanitarios, de higiene y remedios; 6) Fomentar las cadenas cortas de comercialización de alimentos que sostengan las actividades de los feriantes, pequeños productores y demás trabajadores de la economía popular; 7) Suspender del cobro de los servicios públicos y de los cortes por falta de pago; 8) Garantizar acceso a internet para estudio y trabajo; atender necesidades de los estudiantes, flexibilizar las obligaciones en las tareas

impuestas a docentes; 9) Creación de empleos, incremento de salarios, créditos a pymes.

Otros reclamos pueden considerarse a mediano y largo plazo: 1) Garantizar la seguridad alimentaria: huertas comunitarias, semillas, etc. 2) Presupuesto para viviendas y mejoramiento de los servicios e infraestructura en todo el territorio. 3) Mejorar el sistema de salud y el sistema educativo: infraestructura, presupuesto y salarios.

j. Acciones colectivas

Entre las acciones colectivas, los/as referentes mencionan las actividades que se hacen desde la organización a la que pertenecen: sindicatos docentes, organizaciones sociales y de asociaciones de pequeños productores. Gran parte de los/as referentes entrevistados/as están trabajando activamente en sus comunidades, por lo que los reclamos a las autoridades se presentan a su vez como medidas en las que la organización o comunidad deben participar.

Desde las organizaciones sociales se sostienen los comedores, merenderos y otras actividades solidarias; las organizaciones de productores se asocian para vender; los docentes se organizan para repartir los bolsones entregados por la DGE, por el sindicato, o para atender a situaciones particulares de sus estudiantes.

Otros/as entrevistados/as mencionan estrategias más dispersas entre familiares, parientes y vecinos/as que colaboran con lo que alguno/a necesita. Las comunicaciones interpersonales se mantienen vía redes sociales, específicamente WhatsApp y Facebook. Su desventaja en la difusión de información falsa se ve compensada en su función de acercar las personas.

Reflexiones finales

Los resultados obtenidos a partir del relevamiento realizado, y su comprensión de manera conjunta con la línea de investigación que sostiene el equipo, nos permite reflexionar sobre algunas cuestiones fundamentales.

En primer lugar, como señalamos en la introducción, la emergencia sanitaria por el COVID-19 encuentra a una Mendoza marcada por rasgos de una profunda desigualdad. No es indiferente, en el desarrollo de la crisis actual, el re-conocimiento de la situación "pre-pandemia". A fines de 2019 la provincia ya mostraba un panorama de estancamiento productivo; disparidades entre regiones; altos porcentajes de trabajo informal, desempleo y precariedad laboral; una pobreza superior a la de los años previos, agravada por los problemas en el hábitat y la infraestructura de numerosos barrios; dificultades en el acceso a los sistemas de salud y educación.

Por lo tanto, la llegada de la enfermedad, y las medidas que se han tomado, impactaron sobre un territorio, hogares y población que no son ideales ni homogéneos, sino segmentados, fragmentados y desiguales. Ese conjunto de des-

igualdades, si bien reconocen causas estructurales de larga data, se agravaron considerablemente con las políticas de ajuste implementadas en los últimos años, tal como se observa con las cifras de pobreza y desocupación.

En segundo lugar, la crisis golpea desigualmente según las condiciones económico-sociales previas y el tipo de inserción ocupacional y económica. En este sentido, todos/as nos podemos contagiar de esta enfermedad respiratoria, sin embargo, no todos/as le hacemos frente en las mismas condiciones: las posibilidades de transitar la enfermedad en sí, de tomar medidas de higiene y preventivas, de recluirse cómodamente en casa, etc., están directamente relacionadas con el conjunto de desigualdades previas al COVID-19. Las entrevistas ponen de manifiesto, asimismo, los impactos en las subjetividades, las dificultades en la convivencia familiar, la desestructuración de la vida cotidiana; todos aspectos agravados cuando las condiciones materiales de vida son indignas.

Un ejemplo claro que refleja esta desigualdad ante el contexto actual fue la rapidez con que los sectores dominantes de la agricultura mendocina consiguieron los permisos para continuar con la cosecha, y lo rápido que se “lavaron las manos” cuando los trabajadores “golondrinas” terminaron con las labores y quedaron varados en la Terminal. Mientras duró la cosecha el gobierno provincial exigió un protocolo por el COVID-19; cuando esta terminó, los cosechadores y sus familias pasaron a estar desocupados y sin ningún tipo de protección.

En tercer lugar, la crisis sanitaria no solo afecta de forma diferenciada a los sectores sociales, sino que también lo hace por género y edad. Los/as entrevistados/as señalaron las dificultades que enfrentan las mujeres relacionadas a la violencia de género, pero también para sostener los cuidados. Esta cuestión que es mencionada por las referentes de sindicatos docentes, puede ser trasladada a las mujeres que se desempeñan en otras ramas y sectores de actividad. Al trabajo productivo y reproductivo de siempre, ahora se le suma una mayor carga de las actividades escolares de los niños, niñas y adolescentes a cargo. Como han demostrado otros estudios, estas cuestiones se profundizan a medida que aumentan los días de aislamiento.

En cuarto lugar, la problemática de la crisis se presenta como integral: sanitaria, económica, política, social y subjetiva. Frente a los planteos dilemáticos (economía versus salud, política versus economía) se vuelve imprescindible reconocer el carácter complejo e integral de la crisis. En términos de un trabajador precarizado, la disyuntiva se plantea entre romper con el aislamiento exponiéndose al contagio o no contar con los ingresos básicos para alimentar a su familia. Las diferentes dimensiones se entrelazan dialécticamente y requieren un abordaje holista, en cuyo trasfondo no se encuentra la pregunta sobre si es o no necesaria la “presencia” del Estado sino la orientación política de las medidas estatales. El debate real no es atender o no a la economía, sino ¿quiénes pagan los costos económicos de la pandemia?

En quinto lugar, el relevamiento realizado nos convence de la necesidad de encarar conjuntamente la lucha contra el virus y contra la desigualdad. Nuestra

interpretación del relevamiento realizado es que la batalla asume dos grandes planos. Por un lado, el epidemiológico, que establece la necesidad de establecer y mantener medidas que logren reducir tanto como sea posible el impacto del coronavirus. Por otro lado, en el plano económico, emerge la necesidad de garantizar tanto la producción de ciertos bienes y servicios esenciales, como el acceso a los mismos, atendiendo sobre todo a los sectores más golpeados por la crisis. La relación entre ambos planos es particularmente compleja, pero debe encararse para poder sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio, y la progresiva apertura de actividades.

Finalmente, las organizaciones sociales y los sindicatos reclaman y ofrecen participar en el relevamiento de las necesidades, en la organización de la solidaridad y en la toma de decisiones, porque son las que están en el territorio, luchando desde antes de la pandemia contra la pobreza, la desocupación y por mejoras en las condiciones de vida en Mendoza.

Bibliografía y fuentes consultadas

- CORTESE, C., BAUZA, J y Equipo de Investigación (2016) Trabajadores privados no registrados y trabajadores públicos precarios: dos caras de la inclusión en la explotación laboral. Informe final SeCTyP, FCPyS, UNCuyo.
- CORTESE, C., LLANO, M. C. y Equipo de Investigación (2011) ¿Cambios en la distribución de la riqueza en la última década? Crecimiento económico e impactos sociales en la población de Mendoza Informe final Investigación 2009/2011. SECTyP, UNCuyo.
- CORTESE, C., LLANO, M. C. y Equipo de Investigación (2013), Estrategias de desarrollo y políticas sociales para una redistribución de ingresos en el marco de un modelo concentrador de la riqueza, Mendoza: Informe Final Proyecto Bial 2011–2013, SECTyP, FCPyS, UNCuyo.
- DECNU 297/2020 “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”, 19 de marzo del 2020.
- DEIE (2019), Informe anual Encuesta Condiciones de Vida 2018. Disponible en <http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/repositorio-de-novedades/encuesta-de-condiciones-de-vida-informe-anual-2017-215>
- DEIE (2020), Pobreza e Indigencia. Octubre 2019. Gacetilla de Prensa 01 de abril del 2020. Disponible en: <http://www.deie.mendoza.gov.ar/#!/articulo/pobreza-e-indigencia-octubre-2019-279>
- INDEC (2016), La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Disponible en https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf
- INDEC (2020a), Trabajo e ingresos. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) N° 1. Segundo semestre de 2019. Informes técnicos. Vol. 4, n° 59
- INDEC (2020b), Condiciones de vida. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. N° 4. Segundo semestre de 2019. Informes técnicos. Vol. 4, n° 59